

20ª SESION ORDINARIA DEL 17 DE AGOSTO DE 1880

PRESIDENCIA DEL SR. DEL VALLE

**SUMARIO:** Se considera un mensaje del Poder Ejecutivo devolviendo con observaciones la ley mandando cesar en sus funciones á la legislatura de Buenos Aires. El Senado insiste en su anterior sanción.

**Señores senadores**

—  
Argento  
Baibienes  
Baltoré  
Bárcena  
Carrillo  
Civit  
Cortés  
Del Valle  
Del Viso  
Figueroa  
Frias  
Gelabert  
Gómez  
Leguizamón  
Lucero  
Navarro  
Ortiz  
Pizarro  
Santillán  
Villanueva

En Belgrano, residencia provisoria de las autoridades nacionales, reunidos en su sala de sesiones los señores senadores al margen anotados, el señor Vicepresidente 1.º declara abierta la sesión, con inasistencia de los señores Febre y Padilla (ausentes de esta capital con licencia); y, de los señores Igarzábal, Paz y Vélez (con aviso).

Leída y aprobada el acta de la anterior, se dió cuenta de una nota de la Cámara de Diputados comunicando haber sancionado el proyecto mandando cesar en sus funciones, por medio del Interventor Nacional, la Legislatura rebelde de la Provincia de Buenos Aires (al Archivo), y de una solicitud de varios vecinos de Márcos Paz, Luján, etcétera, pidiendo se declare rebelde á la Legislatura de Buenos Aires y se le mande cesar en sus funciones. (Al Archivo).

**Sr. Presidente** — Se ha presentado también un pliego del Poder Ejecutivo

relativo á esta misma Ley, mandando cesar á la Legislatura de Buenos Aires en sus funciones.

Como ese asunto se discutió en sesión privada, consulto á la Cámara si ha de seguir el mismo procedimiento en este momento, ó si se ha de dar cuenta en sesión pública de este mensaje.

**Sr. Rocha** — Siendo asunto público, debe darse cuenta de él en sesión pública.

**Sr. Presidente** — Así se hará.

**Sr. Pizarro** — Desearía que la solicitud de los pueblos de Buenos Aires, pidiendo la cesación de la Legislatura rebelde de esa Provincia, no muriese en el Archivo y se mandase publicar en los periódicos como un documento correspondiente al Senado.

—Apoyado.

**Sr. Presidente** — Suficientemente apoyada esta moción, está en discusión.

—No haciéndose uso de la palabra, se vota si se han de publicar las solicitudes á que se refería el señor Senador por Santa Fe, y resulta afirmativa.

Acto continuo se lee el mensaje del Poder Ejecutivo, cuyo tenor es el siguiente:

Agosto 17 de 1880

CAMARA DE SENADORES

20.ª sesión ordinaria

Poder Ejecutivo  
Nacional

Belgrano, Agosto 16 de 1880.

*Al Honorable Congreso de la Nación:*

El Poder Ejecutivo en uso de sus facultades constitucionales, tiene el honor de devolver al honorable Congreso el proyecto de ley que le ha sido remitido, declarando cesante la actual Legislatura de Buenos Aires, y pide á Vuestra Honorabilidad se sirva reconsiderarlo, agregando á las consideraciones que le sugerirá sin duda un estudio más detenido del asunto, las siguientes observaciones:

Las primeras son de forma y se refieren á la rápida deliberación con que ha sido adoptado el proyecto de ley, procediendo en ambas Cámaras por horas, sin orden del día y apartando de toda ingerencia al Ejecutivo.

Esto es precisamente uno de los motivos que ha ocasionado la renuncia del Presidente, que no puede aceptar un sistema de procedimientos que lo excluye de la deliberación, para comunicarle de improviso proyectos sancionados por grandes mayorías en ambas cámaras, quedando así reducido su alto carácter al de un ejecutor subalterno de las resoluciones dictadas por el Honorable Congreso.

La consideración anterior se agrava aun más, si se tiene presente que las deliberaciones del Congreso recaían en esta ocasión sobre una provincia *intervenida*, es decir, puesta bajo la acción directa é inmediata del Ejecutivo Nacional, y que era por lo tanto más inesperado el que se prescindiera de conocer sus opiniones y hasta de escuchar sus informes, que por nuestras prácticas mismas debían reputarse indispensables.

El Gobierno de la Nación ejerce hoy como en ningún otro día de nuestra historia sus atribuciones constitucionales, en su mayor plenitud, sobre los hombres y sobre los pueblos, con el asentimiento universal y en medio de la paz poderosamente asegurada. Así nunca hubo mayor razón para que sus actos se desenvolvieran tranquilamente, buscando todos los caminos del acierto, puesto que sabe que no se embarazará eficazmente su ejecución por combinación alguna de medios ó de circunstancias.

Así tan sólo la resolución del Honorable Congreso no admitiendo la renuncia del Presidente de la República, y que es un verdadero desagravio por la unanimidad con que ha sido votada, le permite hoy, sin mengua de su decoro, ejercer sus facultades constitucionales, pidiendo á Vuestra Honorabilidad la reconsideración de la ley dictada.

Hay por otra parte, observaciones de un carácter más trascendente y que el Poder Ejecutivo reputa como un deber presentar á la consideración de Vuestra Honorabilidad.

El Presidente de la República, comandando como jefe en el hecho, y por su derecho el ejército de la Nación, recibió la sumisión de las fuerzas revolucionarias situadas en la ciudad de Buenos Aires, dejando establecido que

permanecerían en sus puestos los poderes públicos que no habían sido removidos. La Legislatura se halla en este caso y sus actos anteriores quedaron verdaderamente cubiertos con un velo de indemnidad.

Este hecho fué inmediatamente conocido por el Honorable Congreso y por la Nación toda.

Las fuerzas insurreccionales no se habían aun disuelto por entero y se practicaba su desarme, cuando el Honorable Congreso quiso conocer algunos pormenores sobre las negociaciones que habían precedido á la rendición de la ciudad de Buenos Aires, y dirigió al Poder Ejecutivo las preguntas formuladas en la minuta del 3 de Julio, y que por la gravedad de las circunstancias fijaron fuertemente la atención pública.

Entre esas preguntas se encontraba la siguiente:—«¿Cómo considera el Poder Ejecutivo á la Legislatura de Buenos Aires en su actual composición?»

El Poder Ejecutivo respondió:—«Esta pregunta tiene su respuesta en los hechos producidos. El Poder Ejecutivo ha reconocido como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires al Presidente del Senado, lo que importa la subsistencia de este cuerpo y aun de la Legislatura misma.»

La contestación del Poder Ejecutivo no fué contradictoria y ni aun siquiera puesta en discusión. Al amparo de estas declaraciones, quedó subsistente y ha continuado funcionando la Legislatura de Buenos Aires.

No entra en los propósitos del Ejecutivo el defender ó impugnar la conducta de la Legislatura de Buenos Aires, cuyos procedimientos ulteriores no han correspondido sin duda á la expectativa de la Nación y de la Provincia misma; pero es para él una obligación de honor el representar en esta ocasión ante el Honorable Congreso, las declaraciones que fueron hechas en momentos solemnes para la paz de la República.

El Poder Ejecutivo pide de un modo encarecido al Honorable Congreso, se sirva reflexionar sobre los hechos mencionados, al tomar en nueva consideración el proyecto de ley que se devuelve atentamente con este mensaje.

Dios guarde al Honorable Congreso de la Nación.

N. AVELLANEDA.

BENJAMÍN ZORRILLA.

SANTIAGO S. CORTÍNEZ.

CARLOS PELLEGRINI.

**Sr. Presidente**—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

**Sr. Gelabert**—Hago moción para que se trate en la presente sesión.

—Aplausos.

**Sr. Presidente**—Está en discusión la moción del señor Senador por Corrientes.

**Sr. Leguizamón**—Aun cuando estoy de acuerdo con que se trate este asunto lo más pronto posible y si en mi mano estuviera lo resolvería ahora mismo, debo manifestar á la Cámara que mis honorables colegas de la Comisión de Negocios Constitucionales están ausentes y no podrán probablemente venir hoy.

El doctor Paz concurrió ayer á la Comisión Especial que nombró el Senado, un poco enfermo; apenas podía caminar, y me expresó al mismo tiempo que quizá no podría concurrir hoy, porque se había agravado su enfermedad en el viaje que de la ciudad aquí había hecho.

El doctor Igarzabal estaba en idénticas condiciones.

Por lo tanto, deseando como el que más que este asunto se resuelva lo más pronto posible, haría moción para que la Cámara se constituyese en comisión con el objeto de tratarlo.

**Sr. Pizarro**—Si ha de tratarse sobre tablas, no hay necesidad ni de que la Cámara se constituya en comisión ni de que el asunto pase á la Comisión de Negocios Constitucionales.

**Sr. Gelabert**—Mi moción ha sido en el concepto de que después de ser tomado en consideración por el Senado este mensaje, resuelva la Cámara si ha de ser en Comisión ó de otro modo.

**Sr. Leguizamón**—Había oído destinarlo á la Comisión de Negocios Constitucionales, y por eso me he permitido observar...

**Sr. Presidente**—Pero el señor Senador por Corrientes hizo moción para que se trate sobre tablas y es lo que está en discusión.

**Sr. Argento**—Yo he de estar porque nos ocupemos inmediatamente de este asunto, porque para mí no es nuevo; es muy viejo. Ahora no hace el Senado, sino ratificar una resolución anterior que se dictó por el honorable Congreso, cuando se trató de la intervención nacional en la Provincia de Buenos Aires.

Pero para evitar susceptibilidades que no tienen razón de ser, desearía, si, que pasáramos á cuarto intermedio, y que en el interin se llamaran á algunos de los ministros del Poder Ejecutivo, por si quisieran asistir, para que no se diga en ningún caso que nosotros procedemos

de una manera violenta, por horas, á pesar de que estamos en nuestro perfecto derecho para hacerlo ni el Presidente de la República ni nadie puede hacernos cargos por esto, porque cuando las circunstancias son premiosas y angustiosas como en este caso, los poderes públicos deben proceder con toda la libertad y la presteza que sea posible.

Así es que yo modifico la moción en este sentido: para que si se trata este asunto sobre tablas, se mande llamar á los ministros del Poder Ejecutivo á fin de que tomen parte en la discusión.

**Sr. Rocha**—Bastará que se les avise.

**Sr. Argento**—Desearía que mi pedido tuviera toda la solemnidad de una moción.

—Apoyado.

**Sr. Presidente**—¿La moción del señor Senador es para que se invite á concurrir á esta sesión á los señores ministros del Poder Ejecutivo?

**Sr. Argento**—Sí, señor, por si quieren venir.

**Sr. Presidente**—Estando suficientemente apoyada la moción del señor Senador, se votará en su oportunidad.

Debe votarse primero la moción del señor Senador por Corrientes, para que la Cámara se ocupe sobre tablas de este asunto, agregando la modificación que aceptó el señor Senador de que sea después de un cuarto intermedio.

—Se vota y resulta afirmativa.

Está en discusión la moción del señor Senador por Santa Fe, si se invita á los ministros del Poder Ejecutivo, para que concurran á esta sesión.

**Sr. Figueroa**—Si están en la Capital ¿y si no están?

**Sr. Presidente**—Se supone que estén en la Capital, que es el asiento de las autoridades nacionales.

—Se vota y resulta afirmativa, pasando la Cámara á cuarto intermedio con el objeto indicado.

—Vueltos poco después á sus asientos los señores senadores, dijo el

**Sr. Presidente**—Continúa la sesión.

Se ha invitado á los señores ministros para que asistan á esta sesión, de acuerdo con la resolución del Senado.

Se les hizo saber también que el Senado esperaba hasta las tres y media para entrar nuevamente á sesión.

Este aviso se le ha dado personalmente á uno de los señores ministros, y contestó que era posible que viniera, ó que no viniera.

Como ha pasado ya la hora fijada ha vuelto á entrar el Senado á sesión sin la presencia de los señores ministros.

Se va á dar lectura de la nota del Poder Ejecutivo.

—Se lee nuevamente.

**Sr. Presidente**—Está en discusión.

**Sr. Rocha**—Pido la palabra.

Señor Presidente: la decisión de esta honorable Cámara para tratar este asunto, muestra dos cosas: — que comprende cuán imperiosa es la necesidad y la urgencia que hay en resolver una vez por todas esta grave cuestión, que tanto afecta á nuestro país, comprometiendo su crédito y sus intereses más importantes; y que en las consideraciones con que ha devuelto este asunto el Poder Ejecutivo, no se han encontrado razones bastantes para fundar el veto.

Basta oír la lectura del mensaje del Poder Ejecutivo para darse cuenta de que el señor Presidente de la República se ha impresionado con la lectura de la ley dictada por el Congreso, y que por un fenómeno psicológico muy común, ha visto en el espíritu de los señores senadores y diputados que formaron la mayoría que sancionó ese proyecto, las mismas impresiones que este proyecto ha producido en el espíritu del señor Presidente.

El mensaje, propiamente hablando, no contiene la razón del veto.

Siempre que me he encontrado en oposición con el Poder Ejecutivo, he dado pruebas de que le guardo todos los respetos debidos; pero esto no impide, me parece, no sólo en este cuerpo sino del Congreso, reclame contra la razón que da el Poder Ejecutivo, única á mi juicio, para pedir la reconsideración de la ley sancionada, puesto que ella importa hacerle el cargo al Senado

de haber procedido precipitadamente y hasta con irregularidad en la consideración de este asunto.

Resumiendo pues las observaciones contenidas en el mensaje, vienen á quedar en esto: que á juicio del Poder Ejecutivo *tanto el Senado y la Cámara de Diputados han procedido fuera de su derecho cuando han entrado en la consideración de este asunto.*

¿Es exacto esto señor Presidente?

Para hacer una acusación tan grave, dirigida á uno de los poderes públicos, por otro poder público, por regulares que sean las formas en que la haga, por atentas que sean las palabras con que la formula, es preciso que haya una fórmula expresa y clara en la Constitución ó en una ley para que pueda fundarse en ella.

Por la seriedad misma de los poderes públicos, por el mismo respeto que se deben, no puede suponerse que se acuse de faltar á la forma del procedimiento, que se acuse siquiera de proceder con precipitación, sino cuando ella es tan clara y tan evidente, que no admita ni discusión.

¿Qué diría el Presidente de la República si el Congreso sancionara una minuta en la que, si como deseo, este voto fuese rechazado, le dijese: ha procedido usted con precipitación al vetar la ley, porque no ha tenido en cuenta que no ha habido razones fundamentales para vetarla, y que los hechos que alegaba los había expuesto en otra forma cuando el Congreso lo había reclamado? Habría por lo menos una falta de consideración por nuestra parte. Habría algo más, un olvido de la manera como deben tratarse los poderes públicos en provecho del país y en provecho del prestigio que deben tener.

Y aunque no es esa la mente del Presidente de la República (y digo del Presidente—porque el Poder Ejecutivo para nosotros es unipersonal) sin embargo, eso resulta del mensaje que nos ha enviado.

Nos dice que hemos procedido con precipitación, que hemos salido del procedimiento que debiéramos haber adoptado—pero ¿en virtud de qué derecho el Presidente nos indica la forma en que debemos tratar este asunto?

Nosotros tenemos la Constitución y el reglamento que nos marca la manera de proceder.

Cuando se trata de adoptar alguna de las diversas formas de discusión establecidas por nuestro reglamento, no podemos ni debemos tener otros elementos para formar nuestra opinión que nuestro propio criterio y conciencia, lo mismo que no los tiene el Presidente para juzgar de los asuntos que se someten á su juicio.

Nosotros no podemos, en un caso dado, decirle al Poder Ejecutivo: «sabemos que tiene tal asunto desde tal día y nos manda tal otro; son pocos días para haber formado su juicio.»

Dada la naturaleza del asunto, dado el conocimiento que tenemos de él, lo juzgamos el día que creemos indispensable.

Es posible que empleemos menos tiempo que el necesario, á juicio del Poder Ejecutivo, pero si á nuestro criterio basta esa suma de tiempo y esa manera de proceder, estamos en nuestro derecho ateniéndonos á nuestro juicio propio.

De otra manera sería preciso que antes fuéramos á averiguar quien tenía razón, si el Presidente ó nosotros.

No sé quién tendría razón en este caso; pero si, sé esto: que cada cuerpo y cada hombre mide el tiempo y adopta la forma más conveniente para tratar un asunto, de acuerdo con el procedimiento establecido que su criterio le sugiere como más conveniente.

Yo estoy seguro que el señor Presidente no se ha dado cuenta de esto; sino no nos habría venido á dar la lección y á enseñar al Congreso como se tratan los asuntos.

El Presidente en sus relaciones sociales y privadas ha mostrado bien que sabe lo que se debe á los poderes públicos y á los hombres; de manera que nos es dado suponer que no ha procedido en esta incongruencia, sino movido por la efervescencia de las pasiones y teniendo en cuenta lo grave de la responsabilidad; sino se habría aperebido de cuán inconveniente es eso de venir á enseñarle al Congreso cuál debe ser su manera de proceder, cuando el Congreso ha procedido dentro del reglamento y de la Constitución.

Pero ¿es cierto que hemos procedido con precipitación?...

Dejando de lado ese punto, y juzgando por la conveniencia y por los hechos ¿es cierto que el Presidente no sabe esto? ¿es cierto que lo hemos excluido de este asunto?

Para mí, pienso que también á ese respecto ha incurrido en error.

Este asunto se ha tratado en la prensa, en las conversaciones particulares; ya Cámara se ha ocupado de él hace un mes, ó mes y medio, y difícil que algún Diputado ó Senador no haya hablado con el señor Presidente y le haya anunciado esto.

Después que este proyecto se puso en camino, diversos miembros del Congreso pusieron en conocimiento del señor Presidente de la República que iban á ocuparse de este asunto; de manera que sabía que de un momento á otro el hecho se iba á producir.

Además, no sé cómo el señor Presidente podría reclamar como una falta de consideración que no se hubiera llamado al Ministerio cuando es un derecho de la Cámara el llamarlo para pedirle explicaciones, como es un derecho de los ministros el poder venir á la Cámara para participar del debate.

Y ni aun para pedirles explicaciones: era regular que el Congreso llamase al Ministerio, porque es necesario no olvidar cuál ha sido la regla de conducta que han adoptado los señores ministros desde que el Congreso ha trabajado en Belgrano: no concurrir á las sesiones del Senado ni tampoco á las de la Cámara de Diputados.

El señor Senador Ortiz hizo una interpelación sobre un asunto de necesidades materiales.

El señor Senador Pizarro hizo otra interpelación sobre cuestiones políticas importantes.

Otra interpelación hizo también el señor Achával en la Cámara de Diputados, y los señores ministros no creyeron que debían venir.

¿Cómo pues, preocuparnos tanto y llamarlos, cuando ellos no quieren venir?

Ahora mismo se ha detenido la sesión se ha señalado un cuarto intermedio, se manda llamar á los ministros. se les previene que se va á tratar este asunto en que el Poder Ejecutivo recla-

maba se le escuchase, este asunto sobre el que nos mandaba un mensaje tan ligero, perdóneseme la palabra, tan limitado; y sin embargo los ministros no vienen.

El señor Presidente de la República, se ha impresionado vivamente y le ha parecido que había muy graves razones en lo que en realidad no eran sino consideraciones del momento.

Esto es natural en el espíritu humano, Siempre que se está bajo una impresión un poco intensa no se ven con claridad las cosas cualquiera que sea el brillo de la inteligencia, cualquiera que sea la seguridad del juicio.

En esta situación moral se agrandan los objetos, se extienden, cuando en realidad no son sino hechos comunes.

Esto es lo que ha pasado al señor Presidente en este caso, y no debemos extrañarlo, porque todos los hombres están sujetos á error.

Me parece que he demostrado que hemos tenido el tiempo necesario, que hemos seguido las formas regulares en esta ley, que no hemos faltado á ninguna cláusula de la Constitución, á ninguna prescripción del Reglamento; que no hemos cometido tal agravio contra el Presidente para que el Congreso vaya á hacerle un acto de desagravio. No, ni habría razón suficiente. Les era muy agradable á todos los miembros del Congreso que el Presidente de la República no dejase de terminar su período y esta ha sido la razón por que no le han aceptado su renuncia.

**Sr. Argentó**—El no daba la razón de su renuncia.

**Sr. Rocha**—Es una facultad constitucional que tenemos que ejecutarla muy seriamente con toda nuestra conciencia.

Cuando viene el primer magistrado de la República y nos dice sencillamente: renuncio, no debemos aceptarle la renuncia; debemos juzgar con nuestro criterio de hombres de Estado, las razones, para hacer este cambio de gobierno, que siempre es una grave perturbación para el país.

Pero, dejando esto á un lado me contraeré al último punto.

El señor Presidente dice que como general en jefe del ejército de la nación, de hecho y de derecho, acordó ciertas condiciones por las cuales subsisten

los poderes rebeldes de la provincia de Buenos Aires, incluso la Legislatura.

El señor Presidente nos hizo decir en un mensaje al Congreso, cuando reclamaba el doctor Pizarro ciertas explicaciones, *que no se había hecho pacto de ninguna clase*, que era una sumisión lisa y llana de los rebeldes.

**Sr. Argentó**—No podía ser de otra manera.

**Sr. Rocha**—No podía ser de otra manera y me parece que las facultades del Presidente de la República, como general en jefe de la nación no hubieran llegado nunca á este punto.

Las facultades del general en jefe son sobre los hechos que se producen en la batalla, durante los actos militares; podría perdonar ó no, podría tomar prisioneros y aplicarles tal ó cual pena, esa sí es facultad del Poder Ejecutivo, pero no podía en ningún caso afectar las atribuciones de otros poderes establecidos por la Constitución, ni creo que el Congreso estaría dispuesto en ningún caso á admitir que porque una revolución se produjese en un extremo de la República, callaran las leyes como en tiempos de los dictadores romanos.

El Presidente de la República tiene únicamente los poderes que le da la Constitución y ninguno de ellos tiene tal latitud, que le permitiese conservar los poderes rebeldes contra la voluntad del Congreso, mucho más, cuando declaraba que no había pacto ni condiciones de ningún género y que era una simple rendición.

Preguntado sobre este punto, dijo: he reconocido al Presidente del Senado y virtualmente puede decirse que se reconoce á la Legislatura. Pero él no había reconocido al Presidente del Senado, él había reconocido al vicegobernador, cosa totalmente distinta del Senado y Cámara de Diputados. Es una posición extraña por la cual puede presidir al Senado pero no es miembro del Senado en ningún sentido.

El vicegobernador puede quedar en pie, puede continuar ejercitando su autoridad y la Legislatura desaparece por haber cometido actos de verdadera rebelión. El vicegobernador tiene una misión que se reduce á presidir las sesiones, tramitar lo que en ellas se hace, lo cual es una facultad mecánica, es una simple función ejecutiva en que no



entra para nada su criterio sino en los casos en que entra á decidir, único en que ejerce una atribución propia y personal. Cuando esto no sucede, ya digo ejerce principalmente funciones mecánicas.

El Congreso no sólo no aceptó esto, sino que cuando se dictó la ley aprobando el decreto de intervención en la Provincia de Buenos Aires, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se dijo que se entendía que esa intervención iba hasta la supresión total de los poderes rebeldes.

En este punto está también equivocado el Mensaje.

No había pacto. El Congreso no ha aceptado en manera alguna que continuase la Legislatura de Buenos Aires que se había constituido en abierta rebelión.

Pero hay más. Doy por hecho todo lo que afirma el mensaje. El Presidente había hecho un pacto reconociendo la Legislatura, el Congreso había ratificado ese pacto. Pero después de este hecho la Legislatura manifiesta clara y determinadamente que continúa y persevera en la rebelión.

Se dice en esa Legislatura que el ejército que se ha batido en Olivera, Puente Alsina y Corrales no es el ejército argentino, sino el ejército de los tradicionales enemigos de Buenos Aires, el ejército de los opresores de la patria. Es en aquella Legislatura que se votan sueldos para los militares que abandonaron su bandera y se pusieron del lado de la rebelión; es en aquella Legislatura en que se proponen todos los atentados de la rebelión y en cuyo seno solo se tiene libertad para calumniar al gobierno de la Nación, y lo que vale más que el gobierno nacional, á la nación misma, haciendo creer que no estamos regidos por la Constitución sino dominados por la violencia, por el fraude y el escándalo.

Yo digo que el Congreso en presencia de estos hechos, cuando veía latente la rebelión, más que latente, palpitante, estallando á cada momento, enardeciendo los espíritus, y preparando de nuevo un estallido análogo al que hemos sufrido, en presencia de la sangre derramada que es sangre argentina, en presencia de la riqueza que se ha despilfarrado allí, y del dinero que hemos

gastado aquí, que habría tenido mejor colocación en abrir canales á través de nuestros desiertos, en abrir pozos artesianos, en cruzar con una red de ferrocarriles nuestro territorio, en abrir puertos para que vayan allí los buques que han de defender nuestras costas y que hoy no tienen dónde guarecerse, en presencia de esos hechos que no debemos permitir que vuelvan á reproducirse; tenemos grandes responsabilidades como argentinos y como hombres que hemos recibido el encargo de nuestros conciudadanos de velar por el propio porvenir y por su presente, y no podemos continuar haciendo esa política cobarde y de conventillo, que es la que nos ha traído todas nuestras desgracias y todos nuestros dolores.

—Aplausos, bravos.

Si nosotros hubiéramos tenido hombres con el valor necesario desde el primer momento y desde el primer paso que se dió fuera de la Constitución y de la ley, no sólo serían los que piensan como nosotros los que tendrían que agradecerlos, sino hasta nuestros propios adversarios que les hubiéramos evitado haber ido al campo de batalla á hacer fuego contra la bandera de la Nación, y hoy no nos veríamos obligados á arrojarlos de todos los puestos políticos, porque la Nación no tiene confianza en la lealtad de ellos ni en su respeto sincero por la ley y la Constitución.

Yo digo que los hombres de Estado deben prever siempre los peligros, y muchas veces, si es necesario afrontar la impopularidad, no preocuparse por la gritería de la calle.

Nos dirán liberticidas, nos dirán autoritarios, dirán todo lo que puedan decir aquellos á quienes los mueve la pasión. Habrá otros casos en que será necesario apretarse con mano viril el corazon porque tal vez sea indispensable obrar contra los propios amigos de la infancia que tenemos en las filas contrarias; pero sobre estas afecciones, sobre las ligeras popularidades de la calle, están los grandes intereses de la patria.

Esas popularidades ligeras que sólo se hacen en la calle, apenas duran un momento y no hacen la felicidad de los

hombres de Estado, sino aquellas grandes popularidades que se forman después de largo tiempo, por grandes pasiones, y la naturaleza misma nos da un ejemplo. La tierra, la arena, el terrón ligero, se forma con la gota de agua, pero aquellas creaciones que representan el granito, los metales, necesitan millones de años para formarse. Así son las reputaciones de los verdaderos hombres de Estado.

Tenemos que pasar por grandes desgarramientos, por grandes tormentas, como esas que suelen conmover el mundo físico, para llegar á formarnos una reputación sólida.

Los hombres de Estado, casi siempre tienen que ir contra la corriente de la opinión y siempre para servir á su país.

Esta es la historia de todos los grandes hombres. Nosotros habremos tenido talentos, oradores, poetas, valientes militares, pero lo que nos falta en nuestra historia son hombres resueltos y decididos que sepan ponerse en contra de las pasiones populares, de las pasiones populacheras de un momento y eso es lo que necesitamos, señor Presidente, para que haya paz y tranquilidad: necesitamos incrustar en el corazón de los argentinos esto, para siempre, el poder y el honor de la nación; todos los hombres honrados estarán allí para impedir las revoluciones, y nadie podrá hacer revoluciones, porque se irá hasta el gobierno fuerte si es necesario para arrancar por largos años este cáncer que perpetuamente nos está corroyendo y que es necesario que una vez por todas desaparezca.

En nombre de la paz pública, en nombre de un sentimiento conservador, para que los partidos políticos comprendan que tendrán que perder todas sus posesiones el día que empleen medios de fuerza, reclamó que el Congreso insistiera en esta ley y aplique á la Legislatura de Buenos Aires la justa pena que merece por el delito que ha cometido alzándose contra la nación, la justa pena del delito en que ha reincidido prebendiendo de nuevo reavivar las pasiones para llevarnos otra vez á un estallido como el que ha tenido lugar y las desgracias en que nos hemos visto envueltos.

**Sr. Baibiene**—En la sesión en que fué

votada esta ley por el honorable Senado, no asistí yo contra mi voluntad, pues aquella sesión tuvo lugar un día no ordinario. Por eso no pude salvar mis opiniones y mi responsabilidad, fundando mi voto en contra de esta ley, de esta ley que, para mí, es el acto más grave que se haya consumado en los años que llevamos de vida constitucional.

Yo he visto con toda la evidencia de los hechos que se consuman á la luz del día, la existencia de un pacto de guerra, como causa de la pacificación, de la terminación de la que se había encendido entre Buenos Aires y el Poder Nacional. He visto ese pacto de guerra no solamente en las declaraciones hechas por el Presidente de la República cuando, por medio de un mensaje, contestaba á ciertos puntos de la interpelación del señor Senador Pizarro, sino en los hechos que se han producido.

No habría necesidad de tales declaraciones para tener la convicción profunda, para que mi espíritu descansara en la seguridad de que el pacto de guerra existía en condiciones honrosas para una y otra parte; es decir, en condiciones honrosas para el pueblo argentino, salvando uno de los sentimientos en que más susceptibles son los pueblos: el sentimiento del honor militar, de la dignidad nacional.

Los hechos han sido estos: de un día para otro la paz se manifestó en todos los espíritus, cesaron los fuegos en las avanzadas; los caminos quedaron expeditos para los que estaban en uno y otro campo; las personas se hablaban cordialmente; los miembros del Gabinete Nacional departían en continuas conferencias, con los del Poder Ejecutivo de Buenos Aires; y luego esto que es muy trascendental, que es muy significativo y que prueba hasta la mayor evidencia que no ha habido, ni ha podido haber una rendición á discreción, como sería necesario que hubiese existido en mi concepto, para que este acto del Congreso hubiera podido consumarse y ser justificado: — las armas de los soldados de la defensa de Buenos Aires, y no digo de los rebeldes, señor Presidente, porque según un principio muy vulgarizado de derecho, decir rebelde á una persona que no está juzgada como tal, es injuriarla ó calumniarla: las armas



que estaban en manos de los ciudadanos que hacían la defensa de Buenos Aires, decía, fueron depuestas en las de los mismos jefes que los comandaban.

Cuando hay rendición á discreción, señor Presidente, esas armas ya sabemos con qué formalidades y con qué actos de humillación, se entregan al jefe del ejército que ha impuesto la rendición.

**Sr. Rocha**—Suelen hacerse los honores de la guerra á los que se batan bien.

**Sr. Baibiene**—Así es; pues las armas se entregan al general en jefe del ejército vencedor.

**Sr. Rocha**—O se las llevan á sus casas.

**Sr. Baibiene**—Pido al señor Senador que no me interrumpa, pues no soy orador feliz como él.

**Sr. Presidente**—El señor Senador por Corrientes tiene la palabra y tiene derecho de pedir que no se le interrumpa.

**Sr. Baibiene**—Para mí ese hecho es de una gran significación, de un alcance decisivo; pues él prueba por sí solo, que ha habido una convención de guerra y no una rendición sin condiciones.

Vinieron en seguida otros hechos igualmente importantes, incluso el reconocimiento por el Congreso mismo de la Legislatura y del gobierno de Buenos Aires, por medio de aquella sanción que fijaba quince días para que la Legislatura se pronunciara sobre si asentía ó no en que la ciudad de Buenos Aires fuese federalizada. Y este acto del Congreso fué producido cuando aquella Legislatura sesionaba y algunos de sus miembros se expedían en los términos que ha recordado el señor Senador por Buenos Aires.

Ha sido, pues, reconocida la existencia legal de la Legislatura de Buenos Aires, como consecuencia de esa convención de guerra que no es posible negar, porque se ostenta con todo el esplendor del sol en medio día.

Y bien, señor Presidente; si los hechos no demostraran esto; si ellos no probaran que en virtud de una convención de guerra, el pueblo de Buenos Aires, el heroico pueblo de Buenos Aires, que ha sabido defenderse siempre con bravura, venciendo gloriosamente á los

que lo han agredido; ese pueblo que ha tenido la iniciativa en la obra de la emancipación de Sudamérica; si los hechos no probaran eso, decía, mi corazón de argentino me diría que no se ha rendido á discreción, que no ha podido bajar sus armas sin condiciones; pues cuando menos se habría conducido como los turcos en Plewna haciendo salidas desesperadas, antes que deponer sus armas con sus fueros de pueblo libre y sus derechos de Estado federal.

—Aplausos.

Si, señor Presidente, el pueblo armado de Buenos Aires, no habría sido menos que los peruanos de Arica, ni que los mejicanos de Puebla, y hubiera antes que aceptar una rendición ignominiosa, hecho pedazos sus armas sobre las trincheras, yendo á sus casas á esperar las consecuencias de sus derrotas.

—¡Muy bien!

Yo no puedo aceptar como argentino que se proceda en el concepto de que el pueblo de Buenos Aires haya podido rendirse á discreción, ni ningún sudamericano oíría afirmarlo sin tristeza, porque el nombre de Buenos Aires resuena en todo el continente con ese timbre glorioso, con ese recuerdo que será siempre grato á nuestro orgullo nacional, y que consiste en haber sido Buenos Aires, este hogar siempre encendido de las nobles pasiones, el que arrojó la chispa que había de dar por resultado la emancipación de medio mundo.

—Aplausos.

Pero yo agrego, señor Presidente, examinando la cuestión bajo otra faz, que aun en el caso de que en la convención de guerra, cuya existencia está averiguada, no se hubiese dicho más que esto: aceptamos la paz, ó no se hubiera estipulado otra condición que esta: queda hecha la paz.

¿Qué alcance habría tenido esa estipulación?

¿Qué significa la paz en el concepto de las sociedades modernas?

La paz hoy día, como condición de la vida y del desarrollo normal de las so-

ciedades actuales, no es un hecho ó una idea simple como lo era en aquellas épocas en que el soberano era el Estado, y en que bastaba el sometimiento de todos los súbditos á su voluntad omnimoda, para que la paz existiera; pues esa voluntad era la única ley que regía los destinos de los pueblos. La concepción de la paz presentemente es compleja, y abraza como elementos indispensables, no sólo la obediencia y acatamiento de los ciudadanos á los poderes públicos, sino el ejercicio pleno de todos los derechos y prerrogativas que constituyen la autonomía individual del hombre, y la colectiva de los pueblos. Paz de arriba, paz abajo y de abajo para arriba; es decir, respeto recíproco y acción armónica entre gobernantes y gobernados, con sujeción á las leyes que consagran ese respeto y la inviolabilidad de esa acción. La paz es, pues, el conjunto ó la síntesis de todas las condiciones de vida para los pueblos modernos; y por eso decía, señor Presidente, que aun cuando no se hubiese celebrado pacto alguno y sólo se hubiera acordado producir la paz, esta sanción del honorable Congreso, votada por el Poder Ejecutivo, y que envuelve la presunción de que Buenos Aires se ha sometido á la voluntad discrecional de los poderes de la Nación, sería siempre en mi concepto, y salvando los respetos debidos al Congreso, una violación, no solamente de un pacto sagrado, sino también de principios los más invencibles. Y esto es muy serio y muy grave, señor, y afecta tanto el honor del pueblo argentino, como esas razones que en elocuencia suma, ha expuesto el señor Senador por Buenos Aires.

En virtud de todo esto es que yo he de votar en favor del veto.

Puesto que he recordado el mensaje del Presidente de la República, quiero hacer una salvedad ó observación que me corresponde.

Ha dicho el señor Presidente que su renuncia le había sido rechazada por unanimidad; y como yo he votado en pró de la aceptación, cosa que ha sido visible para todos, que debe constar del acta de la sesión y en las publicaciones hechas por la prensa, no me explico la afirmación en el señor Presidente. Importa á mis principios, á mis ideas, y en

fin, á que no aparezca por un momento fuera del terreno que siempre he pisado en política, hacer esta rectificación y por eso la hago.

**Sr. Pizarro** — Efectivamente, señor Presidente: el mensaje del Poder Ejecutivo compromete muy seriamente ciertos principios á que ha hecho referencia mi honorable colega por Buenos Aires, en la primera parte de su exposición. No se puede reconocer ni por un solo instante que el Congreso para adoptar una resolución cualquiera necesite la concurrencia del Poder Ejecutivo y tenga que llamar siempre á su seno á los miembros de aquél como poder colegislador. Si el Congreso no pudiera tomar una resolución inmediata sobre asuntos de urgencia, que no admiten dilación, y de urgencia á juicio del Congreso mismo y no á juicio del Poder Ejecutivo: si no pudiese tratar un asunto sobre tablas por estar ausentes de la Cámara los señores ministros del Ejecutivo; si no pudiese provocar de suyo una sesión extraordinaria para tratar inmediatamente un asunto que debe ser tratado desde luego; si, en fin, no pudiese proceder en todo esto con la más amplia libertad, y según su propio criterio, sobre la conveniencia de proceder en tal ó cual forma, con la más completa independencia del Poder Ejecutivo, con la independencia más absoluta que le corresponde como al más alto poder político del Estado, y para todo esto hubiese de subordinar su juicio y sus procedimientos al criterio del Poder Ejecutivo reclamando en todo su concurso; desaparecería de todo punto la independencia constitucional de los poderes legislativo y ejecutivo, quedando en el hecho reducida á una completa nulidad la soberanía del Congreso.

Es indudablemente un derecho, y como tal se anuncia en la Constitución, el de llamar al seno del Congreso á los ministros del Poder Ejecutivo para tomar informaciones, ó conocer la opinión del Ejecutivo, cuando el Congreso crea esto necesario, ó cuando carezca de ciertos conocimientos indispensables que el Poder Ejecutivo por estar interiorizado del asunto debe dar al Congreso para su despacho: pero esto, repito, no importa en manera alguna hacer de este derecho de las Cámaras una obligación, é inhabilitarse para deliberar con toda

la independencia que corresponde al más alto Poder de la República.

Todas las observaciones del mensaje del Poder Ejecutivo respecto á la forma del procedimiento que el Congreso ha seguido para la sanción de la ley que motiva el *veto*, quedan, de este modo, constitucionalmente eliminadas de la discusión y son completamente desautorizadas. No entraré por lo tanto en detalles de que se ha ocupado ya mi honorable colega por Buenos Aires.

Pasaré, pues, á ocuparme de otros puntos fundamentales del mensaje con que se relaciona el discurso del señor Senador por Corrientes cuando nos habla de la existencia de un pacto ó convención de guerra en que está ligada y comprometida la política del Poder Ejecutivo.

Yo pretendo también hacer presión sobre el Congreso de la Nación y encadenar su acción con la política del Poder Ejecutivo, inhabilitándole así para juzgar por sí mismo de la situación creada por la rebelión, é incapacitándolo para proceder en presencia de ella según su propio juicio, lo que es de todo punto inadmisibile.

Se ha dicho ya, y es bueno repetirlo, que tales pactos no han existido. Esto se ha declarado en el seno de esta Cámara por el señor Ministro de la Guerra, y posteriormente por el mismo Presidente de la República en el mensaje á que se ha hecho referencia y en que aquél contestó la interpelación que tuve el honor de formular precisamente para sacar esta cuestión del terreno de la incertidumbre, de las vacilaciones y sospechas, fijándola sobre el terreno seguro y firme de una declaración oficial en que se nos dijese si tales pactos habían ó no tenido lugar, y el Poder Ejecutivo contestó entonces: no hay pacto alguno.

No hay pues, convención de guerra; no hay tratado ni nada de todas estas cosas que se dicen hechas por él y que sólo pudieran encadenar al Congreso, considerándolas realizadas por un poder omnipotente tratando en su solo nombre con un beligerante reconocido.

Si, pues, aquel mensaje del Ejecutivo declaró expresamente que no existían tales pactos ¿cómo podría el Congreso darlos por existentes?

Se dice que ha existido un pacto,

capitulación, convención de guerra, etcétera; pero esta misma diversidad de clasificaciones, indica que nada ha habido; pues, en tal caso, la capitulación la convención de guerra, el pacto celebrado, se presentaría con su carácter propio y sería designado por un nombre solo. El carácter distintivo de la verdad es la única, y la diversidad de tales clasificaciones demuestran que no existe el pacto que se supone celebrado.

A vista de esto, y de la declaración explícita del Poder Ejecutivo en aquel mensaje, quedaba el Congreso en plena libertad de acción, pues el Poder Ejecutivo había delarado sobre este particular que sólo había hecho ligeras indicaciones de su política; las que no pasando de su gabinete dejaban al Congreso en su pleno derecho para estudiar las conveniencias de aquella política y para apoyarla si la conceptuaba conveniente á los grandes intereses de la Nación, ó para contrariarla y reprimirla, si la encontraba inconveniente á esos mismos intereses.

El Poder Ejecutivo no puede imponer su política al Congreso. El no es, en último resorto, sino el ejecutor de las leyes del Congreso, y es el Congreso quien representa la soberanía de la Nación más directamente, y quien está así llamado á gobernar el país por los medios que la Constitución ha puesto en sus manos á este efecto y para no dejar al Poder Ejecutivo la dirección exclusiva de los negocios públicos.

En tal caso, aun dada la existencia de aquellos pactos ó convenciones, el Congreso quedaba en su pleno derecho para adoptar otra política, y seguir un procedimiento distinto del indicado por el Poder Ejecutivo con relación á la Legislatura rebelde de la Provincia de Buenos Aires.

El señor Senador por Corrientes ha hecho los mayores esfuerzos por demostrar la existencia de aquellos pactos, ó convención de guerra como él los llama, á pesar de que el Ejecutivo niega su existencia en el mensaje á que se ha hecho referencia tantas veces; pero ya sabemos el juicio que el señor Senador tiene respecto á los documentos oficiales; y aunque él mismo ha invocado ese mensaje para deducir de él el reconocimiento de la Legislatura rebelde por el Poder Ejecutivo poniéndose así en

contradicción consigo mismo sobre la importancia que á tales documentos atribuye según las teorías que ha manifestado antes de ahora acerca de ellos, yo le concederé que el Poder Ejecutivo haya reconocido en aquel documento á la Legislatura. En este caso el señor Senador que se muestra poco consecuente en sus apreciaciones sobre la importancia histórica de los documentos oficiales, no debía decirnos que existen los pactos ó convenciones de guerra á que él se ha referido, puesto que aquel documento afirma que tales pactos no han existido.

Pero el señor Senador guarda silencio sobre esto, é invoca aquel mensaje para sostener el reconocimiento de la Legislatura por el Poder Ejecutivo al propio tiempo que afirma la existencia de los pactos ó convención de guerra cuya existencia niega el mismo Poder Ejecutivo en aquel mensaje, y de esta suerte el señor Senador incurre en manifiesta inconsecuencia.

Si el señor Senador creyó en la existencia de esa convención de guerra ¿por qué no levantó su voz para desautorizar el mensaje del Poder Ejecutivo cuando este afirmó al Senado que no existía pacto alguno, y lo declaró así en aquel mensaje?

De todos modos, yo quiero admitir la existencia de esos pactos que nadie conoce, que no se han publicado ni dado á conocer por nadie, ni por los mismos que tendrían en ello un interés positivo; yo quiero admitir la existencia de esa convención de guerra, tratado de paz ó como quiera llamarla el señor Senador, y sostengo que sería completamente ineficaz; por que el Presidente de la República, según disposiciones expresas de la Constitución, no podría por sí solo celebrar tratados de paz.

Corresponde al Congreso declarar la guerra y hacer la paz y el Poder Ejecutivo no puede hacer lo uno ni lo otro sin autorización del Congreso, como no puede tampoco celebrar tratado de paz sino con completa sujeción al juicio del Congreso y dependiente en todo de su aprobación.

El señor Senador no puede dar á esta supuesta convención de guerra como él la llama, el alcance de un tratado de paz, pues dejaría completamente en manos del Congreso su aprobación.

Ahora, si ese pacto supuesto es una mera convención de guerra, ella no puede alcanzar hasta fijar de una manera definitiva la situación política de la Provincia, reconociendo la Legislatura rebelde, y dominando con esa convención toda la política del Gobierno Nacional en presencia de la rebelión. Una convención de guerra sólo se refiere á la guerra, es decir, á los objetos de la fuerza armada; lo relativo al ejército, á las hostilidades, á la manera de tratar á los vencidos, depósito ó entrega de las armas; en una palabra todo lo relativo á una situación momentánea y transitoria como la de guerra, no á la situación política, permanente y durable del país.

Pero á pretexto de ese pacto ó convención de guerra, ¿el señor Senador pretende crear la omnipotencia del Poder Ejecutivo y suprimir la autoridad del Congreso, dando á esa supuesta convención tal alcance y trascendencia que ella viene á fijar por sí sola la situación política de la Provincia, y con ella la suerte de la Nación entera en el presente y en lo futuro?

Este no puede ser el resultado de una convención de guerra.

Esto quiere decir que si por medio de aquel pacto ó convención de guerra el Poder Ejecutivo hubiera acordado dejar tal cual se encontraba la Provincia y sus poderes públicos antes de estallar la rebelión, el Congreso no podría hoy decir al Presidente de la República: No señor! esta Provincia debe estar intervenida, aun cuando el señor Presidente no quiera intervenir y se halle comprometido á no intervenir y á respetar su situación política!

¿Puede sostenerse esto á pretexto de una convención de guerra? ¿Es esto una convención de guerra? Puede llevarse hasta este extremo el alcance de una convención de guerra, como lo ha sostenido el señor Senador por Corrientes?

Esto es de todo punto inadmisibles; y aunque semejante pacto, convención, ó llámese como se quiera, hubiera en realidad existido, ella en manera alguna inhabilitaría al Congreso para adoptar la política que creyese más conveniente y proceder como con pleno y perfecto derecho ha procedido en esta ocasión, sin

cuidarse en manera alguna de tales pactos ó convenciones.

Por lo demás, el señor Senador por Corrientes se ha mostrado justamente interesado en salvar el nombre argentino comprometido en la rebelión y rendición de los rebeldes, que, al amparo de los elementos del poder de la Provincia de Buenos Aires, han tratado de levantarse contra la Nación y sus autoridades.

Preciso es reconocer, señor Presidente, que las apasionadísimas expresiones del señor Senador en ese sentido emanan de un sentimiento noble y generoso al defender el respeto, la gloria, el heroísmo del soldado argentino, que él quiere hoy hacer reflejar sobre los soldados de la rebelión. Todo esto prueba una cosa: que el señor Senador siente una fuerza, un impulso superior al espíritu de partido; que el sentimiento nacional se manifiesta en medio de la lucha: que él se siente argentino á pesar de sus compromisos de partidista, y que sirviendo á éstos quiere cubrir la derrota de la rebelión con las consideraciones que ha emitido sobre la bravura y honor militar del soldado argentino.

Es así también como se explica que el señor Senador haya mostrado tanto empeño en defender á Buenos Aires, á quien nadie inculpa, y cuya causa defendemos precisamente los que sostenemos esta sanción contra la Legislatura rebelde de Buenos Aires. Es contra los rebeldes y no contra el pueblo de Buenos Aires que se dirigen todos estos procedimientos y el señor Senador no debe extrañar que se les llame rebeldes porque son rebeldes aunque no haya una sentencia judicial que los declare tales.

Son rebeldes en el hecho y según derecho, porque según la ley son tales los que de hecho se levantan en armas contra la Nación, tratan de impedir por la fuerza el ejercicio de los poderes públicos de la Nación y producen los hechos que hoy han producido los rebeldes de Buenos Aires.

Y de lo contrario, diga el señor Senador cómo se llama este caso inculicable que él denomina simplemente resistencia?—¿Esta resistencia á la Nación por medio de las armas; cómo se denomina, cómo se llama?

Porque, al fin, hay muchas resis-

encias: la resistencia del rebelde, la resistencia del traidor, la resistencia del sedicioso, en fin, muchas resistencias, resistencia legal, resistencia ilegal, y el señor Senador comprende en una palabra genérica, que nada dice, esta resistencia...

**Sr. Baibiene**—Hoy no tiene denominación.

**Sr. Pizarro**—¿Porque no se la querrá dar; pero para aquel que tiene buen sentido tiene la denominación de rebelde.

—Aplausos.

**Sr. Argentó**—Ahí está el decreto del Poder Ejecutivo.

**Sr. Pizarro**—Rebeldes en el hecho, rebeldes ante la ley, porque la ley de la Nación los declara tales; porque el Congreso los ha declarado así; porque los ha declarado el Poder Ejecutivo, porque lo han declarado políticamente los poderes públicos, aunque no haya sentencia judicial que les imponga la pena de rebeldes.

Es en vano que el señor Senador quiera confundir la causa de los rebeldes con la causa de Buenos Aires. Aquellos no son la Provincia de Buenos Aires, ni el pueblo de Buenos Aires.

Al lado de las autoridades nacionales ha estado el pueblo de Buenos Aires; el pueblo de Buenos Aires en su inmensa mayoría; el pueblo de Buenos Aires en su casi totalidad.

De doscientas y tantas mil almas que tiene la ciudad en que la rebelión se ha atrincherado, ¿cuántos miles ha reunido en torno suyo?—Y de estos millares de soldados, de estos quince mil hombres de las fuerzas nacionales que han batido la rebelión, ¿cuántos no pertenecen á la Provincia de Buenos Aires?

Las fuerzas de la rebelión han sido escasas, diminutas y no tienen los rebeldes el derecho de decir que ellos representan la provincia ó el pueblo de Buenos Aires.

¿Qué diremos ahora de la campaña de esta provincia? ¿Qué diremos de los jefes del ejército de línea que han nacido en esta provincia y que han batido la rebelión?

El pueblo de Buenos Aires no ha sido rebelde sino sus autoridades. Por eso



se depone á sus poderes públicos. Es sobre ellos que pesa la responsabilidad de la rebelión y no sobre el pueblo; y es en obsequio del pueblo, es en obsequio de la Provincia de Buenos Aires, que amo más que el mismo señor Senador que se presenta defendiéndola cuando nadie la ofende ni ataca, que se toman hoy estas medidas; día llegará en que se diga de mí, á quien se ha presentado como su enemigo: «defendió sus derechos con todo el calor de su alma»!

Bien pues, como ha dicho el señor Senador por Buenos Aires no hay razones ni de punto ni de forma que puedan autorizar un cambio de opinión por parte del Senado con respecto á la ley que manda cesar en sus funciones á la Legislatura rebelde de la provincia.

Era esta una necesidad, señor Presidente, si me es permitido decirlo, hasta de decoro para la provincia, interesada en hacer desaparecer esa Legislatura que ha comprometido todos sus derechos, todos sus intereses, perturbando la paz pública, y que administra los dineros de su tesoro con tan poca reflexión que hace dudar si puede la Provincia de Buenos Aires soportar honorablemente semejante Legislatura.

Diez leguas, más ó menos, de zanja se han abierto en el desierto por el Ministro de Guerra doctor Alsina para impedir el paso de los indios salvajes en nuestra guerra de fronteras; y esas diez leguas de trinchera han costado á la Nación, sino estoy mal informado, de doscientos á trescientos mil pesos fuertes, incluyendo los gastos indispensables en la conducción y transporte de todos los elementos de trabajo necesarios para esta obra en medio de la pampa y lejos de los centros de recursos.

¿Cuánto ha costado, sin embargo, abrir en algunas bocacalles de la ciudad de Buenos Aires diez ó doce varas de zanja y dejar amontonada la tierra de estas excavaciones, cubierta con un tablon ligero de pino, para la construcción de las trincheras que los rebeldes han levantado contra los soldados de la Nación, sin tener otros gastos que los de aquellas excavaciones en el centro de una ciudad populosa y llena de recursos?

Millones! señor Presidente, cuestan á la provincia esas trincheras, y la Le-

gislatura trata aun de votar otros millones, después de desaparecidos los que anteriormente se votaron para gastos de la rebelión y que nadie sabe en qué se han invertido!

Y todavía esa Legislatura, presintiendo acercarse el momento de su desaparición en virtud de esta ley del Congreso... ¡no me atrevo á creerlo y me resuelvo á decirlo, pensando que en pueblo alguno de la República pueda adoptarse un procedimiento semejante, ni hallo quien se pueda concebir tal pensamiento!... todavía esa Legislatura, decía, sintiéndose próxima á desaparecer trata en estos momentos, según soy informado, y se repite públicamente, de hacerse pagar íntegros los sueldos correspondientes á todo el año de sus sesiones!

No hay decoro, ni para la Nación ni para la Provincia de Buenos Aires, en mantener una hora, un minuto más á una Legislatura semejante!

—Aplausos.

Es, pues, en defensa de los derechos de Buenos Aires, en defensa del pueblo contribuyente, del pueblo trabajador, cuyos dineros se despilfarran así, es en defensa del pueblo cuyas libertades se conculcan hasta el extremo de hacerlo soportar las consecuencias de una rebelión que él había condenado públicamente y resistido por todos los medios á su alcance! es en defensa del pueblo de Buenos Aires y de la Nación entera que se manda cesar esa Legislatura.

Esto importa constituirse en defensor de este pueblo por una política enérgica, recta y proba, removiendo graves causas de nuevas perturbaciones para la provincia y para la Nación, dejando á la provincia en condiciones de reconstruir libremente, y según sus propias instituciones, los poderes públicos de la misma.

Actos de la Legislatura rebelde, anteriores y posteriores á esos pactos que se invocan con el Poder Ejecutivo y que nadie conoce, autorizan la medida que se toma de suprimirla en garantía de nuevas agitaciones y en obsequio á la tranquilidad pública.

Ha habido un momento de expectativa en la política del Congreso antes de

adoptar esta resolución, esperando que esa Legislatura se levantase á la altura de la situación y de los más grandes intereses públicos, reaccionando contra sí mismo y rehabilitándose por actos de patriotismo que hicieran posible su continuación. Se ha esperado en vano que esa Legislatura inspirándose en el sentimiento público diera testimonio de sus sentimientos nacionalistas y permitiera creer que, arrebatada de su anterior conducta, estaba dispuesta á remover la verdadera causa de perturbación nacional que ha producido este trastorno, volviendo la ciudad de Buenos Aires, Capital tradicional de la Nación, para asiento permanente de sus autoridades; facilitando así la solución de esta gran cuestión por el ejercicio de una facultad que la inconsecuencia de la política argentina en medio de las vicisitudes de los tiempos, había puesto en sus manos, dejando de esta suerte pendiente de la buena ó mala voluntad de una Legislatura de provincia la definitiva organización nacional.

Pero lejos de preocuparse de nada de esto, señor Presidente, esa Legislatura se ha contraído, como acaba de recordarlo el señor Senador por Buenos Aires, á conceitar nuevamente los ánimos, dificultando la pacificación del país, y profanando los espíritus á nuevas complicaciones y disturbios.

Entonces ¿á qué objeto pudiera tolerársele que continuara funcionando? ¿Qué intereses consulta la continuación de esa Legislatura para que se la tolere por más tiempo? ¿Los de la provincia cuyos intereses ha sacrificado en la rebelión, cuyos derechos ha conculcado y cuyos dineros dilapidado? ¿Los de la Nación que ha contrariado y continúa contrariando hasta el presente y para la cual es una rémora en la realización de este último acto de su organización política?

Entonces ¿á qué objeto respondería el tolerarle por más tiempo? Nada más que á satisfacer las exigencias del partido vencido en la rebelión, partido tan diminuto que no alcanza á representar la opinión de una provincia y mucho menos la de la nación entera.

Pero no es posible que ante ese partido se sacrifique todo, ni puede exigirse que en su obsequio se deje continuar la

Legislatura rebelde inclinando ante él la provincia y la Nación.

Es necesario, pues, que sin consideración alguna, sin odios, sin persecuciones, esa Legislatura venga abajo.

Por todo esto, señor Presidente, y considerando que no hay realmente un argumento nuevo, ni suficientemente fundado que pueda hacer vacilar mi opinión en este caso, he de votar porque el Senado insista en su sanción anterior.

**Sr. Argentó** — Voy á ser breve, porque casi todas las especies de cargos que parece se dirigen por el Poder Ejecutivo al Congreso, con motivo de la sanción de la ley que nos ocupa, han sido levantados victoriosamente por todos los honorables colegas que han hecho uso de la palabra anteriormente.

Sin embargo, hay uno que parece han pasado por alto y creo de la mayor trascendencia. El Poder Ejecutivo afirma en su mensaje que el Gobierno Nacional ha cubierto con un velo de indemnidad (parece que son sus términos) la existencia y legalidad de Buenos Aires.

Esto no es exacto, señor Presidente, es necesario que así conste, y para probarlo me voy á limitar á traer algunos recuerdos al honorable Senado.

Es sabido, que después de los combates del 20 y 21 de Junio, el señor Presidente de la República procedió en esos sucesos, y en sus relaciones con la plaza rebelde, como un poder discrecional, por cuanto en ese entonces no existía propiamente el Congreso Nacional desde el momento que una de sus cámaras, la de Diputados, no estaba en *quorum* legal para funcionar. Decía, pues, que en ese entonces el Poder Ejecutivo procedió, se puede decir, discrecionalmente, ó solo con el consejo de sus ministros y con el particular que solicitaba de algunos de los miembros de esta honorable Cámara. En una conferencia que tuvo lugar para acordar las bases del sometimiento se dijo, como recordarán algunos de mis honorables colegas, que estuvieron presentes, que esas bases no se considerarían como un pacto ó convenio porque esto se creía ignominioso para la Nación y que, por consiguiente, estas bases no se darian al público ni se extenderían por escrito.

Esto es lo que ha sucedido en verdad. Apenas, pues, tuvo *quorum* la Cámara

de Diputados y el señor Presidente sometió el proyecto de ley sobre intervención y estado de sitio á la consideración del Congreso, mi honorable colega por Santa Fe presentó la interpelación que ya todos conocen. Al evacuar el Poder Ejecutivo la pregunta que se dirigió, relativa á cómo consideraba el Poder Ejecutivo á la Legislatura de Buenos Aires, el señor Presidente dijo que la contestación estaba dada en los mismos hechos que se habían producido, hechos en los que el honorable Congreso no tenía ni la más mínima participación hasta entonces. Resultó también que con este motivo mi honorable colega por Santa Fe, sin darse por satisfecho de esta respuesta, reservó sus derechos para hacerlos valer oportunamente como Senador de la Nación por medio de proyectos de ley, que es la única manera como nosotros podemos controlar los actos del Poder Ejecutivo. Así se dijo expresamente.

Por consiguiente, ni en ese entonces ni después el Senado, ni la Cámara de Diputados han consentido en el reconocimiento de la Legislatura de Buenos Aires que sólo habrá tenido lugar en virtud de declaraciones verbales hechas por el señor Presidente de la República.

El Senado como dejó dicho después de una interpelación como la que tuvo lugar, no podía proceder de otra manera, porque este honorable Cuerpo no tiene la facultad de dar votos de censura al Poder Ejecutivo cuando no esté conforme con su política, pues no es facultad que le acuerde la Constitución, sino que todas sus resoluciones se resuelven en proyectos de ley, á objeto de controlar los actos de aquel y mucho menos podía hacerlo este honorable Cuerpo, porque por el carácter que inviste por la Constitución, que es nada menos que el juez del señor Presidente y de los señores ministros, por mal cumplimiento de sus funciones, se halla inhabilitado á hacerlo á fin de no prejuzgar sobre la conducta de esos funcionarios.

Así pues, el único recurso que quedaba en este caso, era manifestar su modo de pensar y su voluntad sobre la política observada por el Presidente en estas emergencias por medio de proyectos de ley. Efectivamente, el primer proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo,

una vez que estuvo en *quorum* legal la Cámara de Diputados y en que propiamente hubo Congreso, fué el relativo al estado de sitio é intervención, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la de Corrientes.

Entonces, como recordarán mis honorables colegas, consecuentes siempre con nuestras ideas y habiéndonos proporcionado la oportunidad que deseábamos, mi honorable colega por Santa Fe, al discutirse ese proyecto de ley propuso una adición en la que se establecía de una manera explícita é imperativa que la intervención iría hasta reconstruir los poderes políticos de la Provincia de Buenos Aires, palabras textuales. Yo hice una adición casi en el mismo sentido, indicando la intervención que sería á los objetos de la parte primera del artículo 6.º de la Constitución; pero el pensamiento era exactamente el mismo, es decir—con el objeto de reconstruir legalmente esos poderes políticos, por cuanto los individuos que los componían se habían hecho reos del delito de rebelión contra la Nación.

Esa misma declaración más ó menos hizo el señor miembro informante, diciendo que ese pensamiento estaba implícito en la misma ley que se discutía. En esa virtud retiramos las adiciones propuestas; pero quedando así constatado en el acta. Igual procedimiento se observó al discutirse esta ley en la honorable Cámara de Diputados.

De suerte que la idea de reconstruir los poderes públicos de la Provincia de Buenos Aires no ha sido de ahora, sino de hace más de un mes en que tuvo lugar esa sanción.

Ahora no hemos venido á hacer otra cosa que ratificar lo que entonces se dijo de una manera clara y categórica por las dos ramas legislativas, es decir, por el Senado y por la Cámara de Diputados.

Ahora, pues, ¿cómo ha podido tomar de sorpresa este procedimiento al Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso? Ratificarse simplemente en lo que entonces pensó y ha continuado pensando hasta ahora, á saber: que esos poderes políticos de la Provincia de Buenos Aires deben desaparecer porque se han revelado contra la Nación.

Así es que no hay ni el más leve mo-

tivo para que el señor Presidente se considere como desairado, y mucho menos porque afirme que el Congreso, ha procedido de una manera ligera al sancionar esta ley porque, guardándose los respetos que se deben los altos poderes entre sí, no tiene derecho de hacer semejantes cargos al Congreso, puesto que cada Poder obra en la esfera de sus atribuciones constitucionales, y el que hace uso de un derecho perfecto, no desaira ni ofende á nadie.

Es muy sabido que la manera como se inician las leyes y como se sancionan, está designada en la Constitución y en el reglamento de debates de cada Cámara, y es sabido también que las leyes pueden tener su origen por simples proyectos de ley presentados por uno ó varios miembros de cada Cámara, y que si tienen el apoyo necesario pasan á Comisión respectiva para que dictaminen, como asimismo que el Poder Ejecutivo puede iniciarlos por sí solo y mandar sus ministros para sostenerlos y tomar parte en las discusiones del Congreso, y que finalmente tiene la facultad del veto, obrando como colegislador.

Por consiguiente, yo rechazo absolutamente esa especie de cargo que se hace por el Poder Ejecutivo al Congreso, porque francamente, lo considero hasta impolítico y poco equitativo.

De lo que dejo expuesto resulta que no es exacto que el Congreso haya tomado participación y se haya hecho solidario de la política que ha observado el Poder Ejecutivo con relación á la Legislatura rebelde de Buenos Aires, y vuelvo á repetir, *á la Legislatura rebelde*, porque es rebelde, por más que á mi honorable colega por Corrientes le haga escorzar esa palabra.

Si se hubieran observado, señor Presidente, las leyes en este caso como se ha hecho en otros análogos, francamente no nos veríamos en la situación difícil en que ahora nos encontramos.

Yo no sé para qué se dictan las leyes, señor Presidente, si ellas no se han de cumplir.—Hace tiempo, desde la administración del señor Mitre en el año 1863, que se dictó la ley sobre justicia federal y que existe la ley relativa á los delitos nacionales. En ellas, los delitos sobre rebelión están especificados de una manera clara y terminante, y esta-

blecido el procedimiento administrativo, diremos así, que en estos casos debe observarse por el Poder Ejecutivo, como igualmente el procedimiento que los jueces deben seguir para el juzgamiento de las causas de rebelión.

**Sr. Baibiene**—Los jueces.

**Sr. Argentó**—Sí, señor los jueces y el procedimiento administrativo ó ejecutivo, también he dicho que debe observar el Presidente en estos casos por medio de la fuerza pública que tiene á su disposición para hacer cumplir las leyes.

El procedimiento es este. Se intima por primera vez á los rebeldes, para que depongan las armas; en seguida, sino lo hacen en el plazo que se les designa al efecto, se les vuelve á intimar, lo mismo por segunda vez, y bajo apercibimiento...

**Sr. Baibiene**—Así es.

**Sr. Argentó**—Y por tercera vez, sino obedecen ya no se les intima, sino que se les somete por medio de la fuerza y se les pone á disposición del juez competente para que los juzgue y les aplique las penas que correspondan por la ley. Después de condenados, recién puede ejercitarse la facultad que le acuerda la Constitución al Poder Ejecutivo para conmutar ó perdonar las penas impuestas por el delito cometido. Esta es la oportunidad en que el Poder Ejecutivo puede ejercer todos los actos de generosidad que quiera en favor de los rebeldes; pero primero que se les someta y se les juzgue con arreglo á las leyes.

Ese es el orden que ha debido observarse, después de los hechos de armas que desgraciadamente han tenido lugar. Mientras tanto, y viendo que no se observan las leyes vigentes, ó que se observan en unos casos y en otros no, he estado hasta tentado de pedir la derogación de semejantes leyes, porque para hacerlas caer en desprestigio, por su inobservancia precisamente, por el Poder encargado de cumplirlas, más vale que ellas no existan.

Quería hacer este recuerdo al Senado para que queden constatados los hechos tal como han sucedido, y para que cada poder público cargue con la responsabilidad de sus actos y quede á la vez de manifiesto ante la República que el Congreso en ningún caso se ha hecho

solidario de la política del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto ha reconocido como legal la Legislatura rebelde de Buenos Aires; y en cuanto ha sido tolerante hasta el exceso con los malos argentinos que se han alzado en armas contra las autoridades nacionales.

**Sr. Gelabert**—Voy á explicar mi voto en dos palabras.

Es muy grave, señor Presidente, el cargo que el Poder Ejecutivo Nacional hace al Congreso, de la brevedad con que ha procedido. Desde luego, debo manifestar que he sido uno de los que más he insistido y perseguido la idea de llevar á cabo esta sanción y he tenido la feliz ocasión, el 22 de Julio en antelas, de exponerle al señor ministro de la Guerra que no podía verme complacido, desde que contemplaba á los hijos de Buenos Aires, de esta Buenos Aires, á quien realmente se debe mucho en la organización nacional, á los Ministros, á los jefes de mar y tierra, que han tenido que abrir las puertas á balazos hasta pasar por sobre miles de cadáveres, dejando centenares de inválidos, mil ó dos mil viudas y otros tantos huérfanos; que si después de todos esos sacrificios que el país se ha visto en la necesidad de hacer para reconquistar el orden y la paz del país, se dejaba á los Poderes Públicos que habían hecho la guerra á la Nación, con este proceder no podía creer que se cimentase un orden regular.

El 22 de Julio, repito, hice presente esto mismo al señor Ministro de la Guerra, ante algunos señores senadores y diputados y el 5 de Agosto tuve ocasión de hacer presente esto mismo al Presidente de la República, señor Avellaneda.

Así es que he votado con conciencia de que realmente debe desaparecer no solamente esa Legislatura, sino todos los poderes políticos de la Provincia de

Buenos Aires, como insistí en observar antes de presentarse el proyecto y algunos señores senadores me dijeron, que debían dejarlos en su ejercicio, por consideraciones especiales al señor Vice-gobernador de la Provincia.

Estas consideraciones me han inducido á pedir que se tratase en la presente sesión de este asunto tan grave al parecer, porque tengo la conciencia de que con justo derecho pido la insistencia de su sanción.

**Sr. Presidente**—Si no se hace uso de la palabra, se va á votar si está suficientemente discutido el punto.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente**—Con arreglo al artículo 62 de la Constitución, la votación corresponde hacerse nominalmente por sí ó por nó.

Se va á votar si el Senado insiste en su primitiva sanción.

—La votación se hace y votan por la insistencia en el proyecto los señores Rocha, Pizarro, Gelabert, Del Viso, Villanueva, Civit, Balteré, Ortiz, Santillán, Figueroa, Gómez, Cortés, Navarro, Leguizamón, Argentó y Lucero; y por la no insistencia los señores Frías, Bárcena y Baibiené.

**Sr. Presidente**—Una resolución del Senado dispone que, en los casos en que se necesite resolver las cuestiones que se sometan á su fallo, por dos tercios de votos, el Presidente tiene derecho de votar. Voto por la insistencia.

Hay 20 senadores presentes, incluso el Presidente. Los dos tercios son 14. Han votado por sí 17 y 3 por nó.

El Senado, pues, ha insistido en su sanción anterior.

Queda levantada la sesión.

—Eran las 5.30 p. m.